



Municipalidad de La Plata

Registro de Decretos

Folio N° 1341

## LA PLATA;

28 JUL 2005

Visto el Expediente Nro. 4061-68090/00, por el cual la agente de la DIRECCION DE RENTAS de la Dirección General de Finanzas Públicas, dependiente de la Secretaría de Economía, señora **Patricia Zulma ZUCCARELLI**, manifiesta que se ha aplicado erróneamente la ley 11757 en su artículo 19° ap. B) y que se lo proceda a liquidar en la forma prevista por aquella, que según manifiesta, “no admite interpretaciones”; y

**CONSIDERANDO:**

Que la mencionada agente, además de intentar interpretar, justamente, y a pesar de lo manifestado, el referido artículo, en su subjetiva opinión, cita parcialmente distintas normas que regularan el adicional por antigüedad anteriormente vigente en la Comuna, y pretende remitirse a una opinión vertida por el Tribunal de Cuentas en una consulta formulada por la Municipalidad de Ezeiza, haciendo diversas manifestaciones que no se ajustan al verdadero texto legal;

Que la petición efectuada no resulta procedente, ni tiene en cuenta ni se ajusta a la normativa vigente en la materia a la fecha a la que se estaría remitiendo ni en la actualidad, ni a la propia Ley 11757 que no establece lo indicado por la presentante;

Que además fundamentalmente y en el caso concreto, la presentación resulta totalmente extemporánea, y no puede en manera alguna ser admitida;

Que en el caso, las normas que regulan la materia en el ámbito municipal conjuntamente con la Ley 11757, son los Decretos 198 y 225 los que son en todos los casos del año 1996 y se aplicaron a la recurrente sin observación alguna desde dicha fecha. Por lo demás, a partir del año 1999, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nro. 2059 se modificó igualmente la regulación del referido adicional, de forma tal que a la fecha que se inicia el presente expediente, ni siquiera era ya de aplicación en el sentido indicado la formativa que se pretende, en forma totalmente tardía, cuestionar;

Que el breve resumen formulado, anticipa desde ya la improcedencia, en función de su extemporaneidad, del planteo que se formula;

Que ello en tanto y en cuanto, lo que en esencia y concretamente se pretende atacar aunque en forma indirecta, son precisamente las normas municipales en función de las cuales se encontraba regulada la materia y con sujeción a los que se realizaran las liquidaciones respectivas;

Que la presentación entonces debe ser analizada con carácter de recurso, respecto de las referidas normas, y el mismo, resulta como se ha señalado, absolutamente extemporáneo por lo que corresponderá disponer su rechazo por tal motivo;

Que en efecto, los actos mencionados, los Decretos 198 y 225, son actos de alcance general, por lo tanto ellos, así como la regulación contenida en los mismos, que han sido aplicados con pleno ajuste a sus disposiciones, se trata de normativa vigente de aplicación en la materia que no ha sido impugnada ni cuestionada en punto a su constitucionalidad ni en esta etapa siquiera, ni menos aún en tiempo oportuno;

Que la presentante conoció la existencia de los decretos en cuestión a partir de su publicación en el Boletín Municipal, que lo fue con fecha 29 de marzo de 1996 en el caso de los Decretos 225 y 198. Pero además de ello, las regulaciones contenidas en las disposiciones legales impugnadas le fueron aplicadas a partir de las liquidaciones correspondientes a los haberes de marzo de 1996 en adelante. Hubiera correspondido entonces, de estar en desacuerdo la peticionante con dichas normas y su aplicación, interponer contra aquellos el recurso contra actos generales contemplado en el Artículo 95° del Decreto Ordenanza General 267, que hubiera sido el remedio a su alcance si estaba disconforme con su contenido y/o pretendía una regulación diferente. Al no hacerlo así, ha consentido todos aquellos actos, siendo la impugnación en sede administrativa que se intenta ahora, en diciembre de 2000, y cuando hacia ya mas de un año inclusive que regía una nueva forma de adicional (la estipulada por Decreto Nro. 2059), absolutamente extemporánea;

Que, es decir, no se cuestionaron a través de los recursos respectivos los actos generales (tampoco siquiera ninguno de los actos particulares dictados en su consecuencia), dentro de los términos legales fijados al efecto por la Ordenanza General 267. De

tal forma y en cualquier caso, resulta evidente el consentimiento tanto de las normas generales vigentes en la materia, cuanto de los actos particulares ejecutados en función de aquellas;

Que por ello, deberá desestimarse por extemporánea la presentación recursiva intentada, dictándose al efecto el correspondiente acto administrativo. Más allá de señalar que tampoco asiste razón a la reclamante en la cuestión de fondo;

Que por cuanto, tal como lo indica la Dirección de Administración de Personal, se ha aplicado la Ley 11757 en todos sus alcances;

Que cabe aún señalar, ante las erróneas manifestaciones de la demandante, que pretende soslayarlas sin fundamento ninguno, que las normas en cuestión, además de tratarse de derecho vigente, en manera alguna son incompatibles ni se oponen entre sí, siendo correcto el procedimiento de aplicación de la Ley 11757, todo lo que ha sido así además determinado por la propia Excma. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en distintas causas al fallar validando la normativa municipal, en casos de planteos de similar tenor al presente (B.60137.B.60138 entre otras);

Que lo expresado, demuestra sin duda alguna la falta de fundamento de las argumentaciones traídas en la presentación, dado que justamente el más Alto Tribunal Provincial se ha expedido sobre la materia, en sentido absolutamente contrario al que pretende ahora sostenerse en aquella;

Que a contrario de lo allí sostenido, la Municipalidad al efectuar la liquidación y pago del adicional se ha ajustado estrictamente a las prescripciones de las normas de aplicación en la materia que nos ocupa, es decir, Ley 11757 y los decretos municipales 198 y 225 de 1996, que se compatibilizan adecuadamente con aquella, conforme lo ha declarado la Excma. Suprema Corte;

Que por otra parte, la Ley 11757 nada estableció para determinar la forma de cálculo correspondiente a los años anteriores de antigüedad que contaren los agentes como pretende afirmarlo la peticionante. Simplemente se limitó a fijar un sistema porcentual para los nuevos años que se cumplieran a partir del 1/1/96. Pero para evitar confusiones y que el nuevo adicional del 1% pudiere llegar a ser liquidado por todos los años, aún los anteriores, consignó una frase aclaratoria, a saber que ese nuevo 1% no debía liquidarse por aquellos años anteriores a dicha fecha, destacando expresamente entonces que la nueva forma de cálculo no afectaría la que correspondiera a aquellos según el régimen vigente a cada Municipio;

Que tal es el único alcance del artículo 19° inc.b) y no que en manera alguna haya venido a regular un adicional por años anteriores y ello resulta claro porque precisamente una interpretación de tal naturaleza lleva sí, como ha quedado claramente explicitado, a alterar el propio texto de la norma;

Que el texto legal en manera alguna autoriza a suponer que se esté efectuando una regulación del adicional por aquellos años anteriores (ni siquiera se fija un valor para el mismo, y obviamente difiere su conformación en cada Municipio) sino todo lo contrario, puesto que justamente aquel presupone necesariamente una intervención de cada Municipio, en punto a la compatibilización de sus propios adicionales que deberían seguir liquidándose en el tiempo por los años anteriores al 1/1/96 y el nuevo adicional que debía incorporarse a aquél, exclusivamente al 1% para los años que se adquirieran con posterioridad a dicha fecha y no para los anteriores, intervención inexcusable en los casos en que, como en este Municipio, el sistema legal vigente para el adicional por antigüedad era el de suma fija y no el porcentual;

Que debe también señalarse que el régimen en materia de bonificación por antigüedad a partir de la reimplantación del régimen constitucional y la consecuente de los Concejos Deliberantes en los Municipios, y las distintas modificaciones al mismo, el sistema de porcentaje directo nunca fue la regulación existente en el partido de La Plata, sino por el contrario, lo fue siempre una suma, variable primero y luego fija, que se determina mensualmente. Y ello en tanto no existía –ni existió nunca en este Municipio– el concepto “adquisición de porcentajes” o mejor aún “porcentajes adquiridos”, porque lo que se adquiriría mediante la antigüedad no era un “porcentaje”, sino una mayor cantidad de años de servicio, y el derecho a cobrar una suma mensual, que en cada mes, al momento de su devengamiento, era, y ello ya desde el sistema legal establecido en la Ordenanza 5812, -el equivalente, expresado en pesos a un porcentaje del sueldo de ese mes, es decir, una suma de dinero;



Municipalidad de La Plata

Registro de Decretos

Folio N° 1342

Que las normas posteriores lo determinaron luego expresamente en una suma fija, siendo ello lo que regía precisamente al momento del dictado de la Ley 11757, régimen que subsistió vigente para los años anteriores al 31/12/95, no habiendo regulación alguna en la nueva Ley referida a tal período, lo que surge claramente del texto de la misma, ya que, contrariamente a lo mencionado en el escrito aquella contiene solamente la garantía de evitar que aquellos años fueran reliquidados al nuevo valor del 1%, garantía que, en su propio régimen, el Municipio había igualmente mantenido;

Que todo ello demuestra sin hesitación la plena constitucionalidad de las normas municipales, la inexistencia de alteración de la Ley 11757, y fundamentalmente que no se ha afectado derecho alguno;

Que la posición indicada, no solamente se desprende claramente del propio texto legal, y ha sido también determinada por la propia Suprema Corte Provincial, sino que así fue también determinada, tanto por la Asesoría de Gobierno como por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, que son, por otra parte, los únicos organismos que han analizado la Ley 11757 a la luz del régimen vigente en la Comuna Platense a la fecha de la entrada en vigencia de aquella. No así el caso a que se refiere en su presentación la peticionante, que pretende tomar una mera opinión del Tribunal de Cuentas, emitida para la Municipalidad de Ezeiza;

Que señaló en efecto la Asesoría lo siguiente "...En efecto la Ley 11757 regula una bonificación por antigüedad aplicable exclusivamente a partir del 1 de enero de 1996. En su apartado segundo, en forma aclaratoria y al solo efecto de evitar que la nueva normativa en este aspecto sea aplicada con anterioridad a la vigencia de la Ley, se establece una autolimitación: o sea, el referido 1% no debe liquidarse hacia el pasado sino solamente a partir de la fecha indicada, por ello su aclaración en el párrafo subsiguiente referida al 31 de diciembre de 1995. Tal autolimitación tiene exclusivamente el alcance referido, vale decir, garantizar que no sea alterado como consecuencia de la aplicación del adicional del 1% el importe que cada agente percibiére a dicha fecha pero en manera alguna dispone una regulación diferente hacia el pasado, la que lógicamente, ser variable en función de lo que haya establecido en su ámbito y dentro de sus propias atribuciones cada Municipalidad...";

Que en idéntico sentido se expidió igualmente la Subsecretaría de Asuntos Municipales sosteniendo que "...con anterioridad al 1/1/96 la regulación legal de la bonificación la daba para sí cada Municipio. Posteriormente, por Ley 11757 se establece un adicional por antigüedad del 1% sobre el sueldo básico con aplicación hacia el futuro, es decir, a partir del 1/1/96 quedando subsistente hacia el pasado las regulaciones preexistentes de cada Municipio...";

Que por todo lo expresado, corresponde rechazar la presentación que con carácter recursivo se ha intentado;

Por ello;


## EL INTENDENTE MUNICIPAL

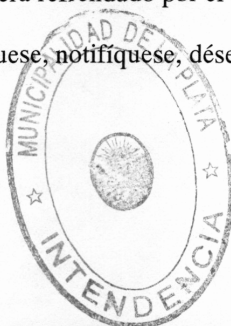
### D E C R E T A:

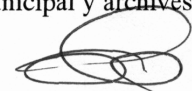
**ARTICULO 1°:** Rechazase la presentación efectuada en el Expediente Nro. 4061-68090/00, por la agente de la DIRECCION DE RENTAS de la Dirección General de Finanzas Públicas, dependiente de la Secretaría de Economía, señora **Patricia Zulma ZUCCARELLI**, DNI. 13.916.285, Legajo Nro. 11.743; por extemporánea y por los motivos expuestos en los considerandos.

**ARTICULO 2°:** El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía.

**ARTICULO 3°:** Regístrese, comuníquese, notifíquese, dése al Boletín Municipal y archívese.

  
Cr. CARLOS A. ALBARRACÍN  
SECRETARIO DE ECONOMÍA  
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA



  
Dr. JULIO CESAR ALARÍN  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA

1063